

El golpe de Estado en Honduras: un ejemplo de resistencia popular



ENRIQUE DAZA GAMBA

*Director del Centro de Estudios del Trabajo y secretario de la Alianza Social Continental.
www.asc-hsa.org*

Honduras es desde hace más de 100 días el centro de la atención de los gobiernos y los movimientos sociales del continente. Allí se presentó un golpe de Estado que recuerda las decenas de golpes perpetrados por los militares durante el siglo pasado en todo el continente, pero en esta ocasión suscitó un repudio casi universal. A los movimientos sociales les preocupa la situación, pues durante todo el tiempo posterior al golpe los hondureños siguen realizando manifestaciones multitudinarias tres o cuatro veces a la semana para protestar contra el régimen de facto y exigir el retorno del presidente constitucional, Manuel Zelaya. En el momento en que se terminó de escribir este artículo la situación era extremadamente volátil. Por dicha razón, más que informar sobre los acontecimientos, el artículo analiza las tendencias del proceso. DESLINDE.



Durante el siglo pasado, Honduras fue el prototipo de una “República Bananera”. De principal exportador mundial del banano en 1924, pasó a ser hoy sede de numerosas maquilas y exportador de productos básicos. Su situación política ha sido particularmente inestable y en tiempos más recientes hubo golpes en 1953, 1966 y 1972 y hasta 1981 vivió bajo dictaduras militares.

Honduras, como casi todos los países del área, implementó desde 1990 la liberalización económica y con sus 8 millones de habitantes y 112.000 kilómetros cuadrados de superficie entró de lleno en la globalización neoliberal, sin haberse repuesto completamente de los estragos producidos por el huracán Mitch, que en 1988 produjo 10.000 muertos y pérdidas materiales por más de tres mil millones de dólares. Este país es, junto con Haití y Nicaragua, uno de los tres más pobres del continente y el quinto más inequitativo. La violencia deja más de 4.000 asesinatos por

año, ocho de cada diez familias sobreviven en la pobreza, ha vivido una destrucción sistemática de la clase media y menos de 3% de la población concentra el 50% de la riqueza nacional. La pobreza se mantiene en niveles muy elevados, con más de cinco millones de personas viviendo actualmente con menos de dos dólares al día. En este país la malnutrición afecta al 30% de la población y, tras una década de liberalización de sus mercados agrícolas, se ha reducido en un 86% la producción de arroz y el gasto destinado a importarlo se multiplicó por 20.

Honduras tiene una Constitución dictada en 1982, bajo el régimen dictatorial del general Policarpo Paz García; en ella

* En los ochenta varias juntas militares por instrucciones de Washington, convocaron asambleas constituyentes que redactaron nuevas Constituciones. Fue el caso de Bolivia 1982, El Salvador 1982, Argentina 1983, Guatemala 1984, Brasil 1985, Uruguay 1985, Chile 1988 y Paraguay 1989.

los primeros 8 artículos son declarados “pétreos”, o sea que nunca se pueden modificar. Esos artículos determinan un tipo de gobierno autoritario y defensor de quienes no están dispuestos a perder el poder. Quien intente cambiar la Constitución es considerado “traidor a la patria”.

El poder político en Honduras tiene su eje en unas 13 familias opulentas que controlan las instituciones del Estado, los ‘poderes’ judicial y legislativo, los principales medios masivos de comunicación, la jerarquía católica y las Fuerzas Armadas. Se trata de un régimen señorial, oligárquico, cuyo eje es la propiedad terrateniente, la inversión extranjera y las exportaciones. Honduras es una de las ‘democracias’ implantadas por Estados Unidos en América Central en la década de los ochenta, en su esfuerzo por aislar y debilitar los impactos de la revolución sandinista en Nicaragua y el progreso de la lucha social en El Salvador.

La economía hondureña es una economía liberalizada. Esto la torna extraordinariamente vulnerable a la crisis recesiva global y a presiones económicas como la suspensión de remesas, financiación externa o desembolsos de las entidades crediticias internacionales. De hecho, si los países centroamericanos, Estados Unidos, el FMI y el Banco Mundial resolvieran cortar todo nexo económico con Honduras, tanto la economía como los aparatos militares hondureños se desplomarían en un instante.

En la última década Honduras había sufrido una tímida modernización que no alteraba sus estructuras fundamentalmente, pero disminuía levemente la autonomía de las fuerzas armadas. El gobierno anterior a Zelaya, el de Ricardo Maduro, había restablecido relaciones con Cuba y retirado su contingente de Irak, pero por otra parte el 3 de marzo de 2005 aprobó el Tratado de Libre Comercio de América

Central, TLC o CAFTA (en sus siglas en inglés), con Estados Unidos.

El 27 de noviembre de 2005 tuvieron lugar comicios legislativos y presidenciales. El Partido Liberal consiguió 62 escaños, 55 el Partido Nacional, 5 el Partido de Unificación Democrática, 4 el Partido Demócrata Cristiano y 2 el Partido de Innovación y Unidad-Social Democracia. El candidato liberal, Manuel Zelaya, se impuso al del Partido Nacional, Porfirio Lobo. El 27 de enero de 2006, Zelaya se posesionó.

Los pecados de Zelaya

La oligarquía hondureña y las fuerzas militares se preocuparon seriamente por las inclinaciones políticas del presidente Zelaya, quien a pesar de haber sido elegido por el Partido Liberal, uno de los partidos junto con el nacional que han detentado el poder durante décadas, estaba demostrando un ánimo reformista, una sensibilidad social y una identificación con la política exterior de los países del ALBA, alianza de la cual formó parte desde 2008.

En realidad el alcance de las reformas de Zelaya era bastante limitado. Un aumento del 60% en el salario mínimo, una mejoría en las condiciones con las cuales los bancos otorgaban créditos y quienes defienden a Zelaya afirman que si bien no reversó las políticas neoliberales de sus antecesores, tampoco las profundizó. En lo que se refiere a sus relaciones con Estados Unidos, había propuesto construir un aeropuerto civil en el territorio de la base militar de Estados Unidos en Palmerola, el cual sería financiado por el ALBA y compartía –aunque con menor vehemencia– las actitudes antinorteamericanas del ALBA, pero esto no se reflejaba en reformas económicas ya que la inversión extranjera, la adhesión al Tratado de Libre Comercio con EEUU y las maquilas siguieron intactos durante

su mandato. A pesar de ello se dio el lujo de, durante el décimo aniversario de la Revolución Bolivariana en Caracas, afirmar que Venezuela era “el ejemplo a seguir” y que había que “tumbar al capitalismo y al imperialismo que por cientos de años habían expoliado a América Latina”.

El Banco Mundial había hecho una evaluación favorable de la política económica implementada por Zelaya y elogiaba sus políticas de crecimiento económico con “equidad; gobernabilidad vía la modernización del Estado y participación ciudadana; protección ambiental, gestión de riesgos y desarrollo del capital humano”.

Cuando Zelaya comenzó su mandato el país necesitaba importar petróleo para funcionar, y si lo hacía la deuda externa consumiría al país. Entonces ingresó a Petrocaribe, al cual pertenecen República Dominicana, Antigua y Barbuda, las Bahamas, Cuba, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Honduras, Jamaica, Surinam, Santa Lucía, Guatemala, San Cristóbal y Nieves, Costa Rica, Venezuela y San Vicente y las Granadinas. Dentro del ALBA podía pagar el petróleo un 40% más barato de su precio real y pagar la mitad de lo que comprase a un 1% de interés a 25 años, con opción de cancelar esta deuda invirtiendo el dinero en programas sociales. Más adelante Zelaya dio ayudas para abaratar el precio de los combustibles y también ayudó al pueblo reduciendo en una tercera parte la tasa de interés en los préstamos para vivienda.

Además Zelaya decretó la gratuidad en la matrícula, lo que benefició a más de 1 millón 750 mil niños y jóvenes en 12.977 centros educativos de todo el país.

- La inversión en educación pasó a ser una de las mayores en América Latina: 9,5% del Producto Interno Bruto.

- Se elevó un 11% la cobertura de Educación Prebásica.



- Se alfabetizó a 116.000 alumnos y a 24.049 personas adultas egresadas de primaria

- Se entregaron 6 millones de textos en materias básicas, y por primera vez incluyendo integralmente a las lenguas indígenas. Treinta mil estudiantes obtuvieron Becas de Excelencia Académica y cuarenta mil Becas Sociales.

- En un año se aprobaron 582 millones de lempiras (la moneda de Honduras) a los municipios del país, con fondos de la Estrategia de Reducción de la Pobreza, en programas de impacto productivo y social, con lo que se benefició a 1 millón 156 mil hondureños.

- En un acto de justicia y equidad social, se puso en marcha el Programa de Protección de las Empleadas Domésticas, que logró incorporar a los beneficios del Seguro Social a 73.315 trabajadoras del ramo. Mediante el ALBA, Honduras recibió US \$30 millones para créditos a pequeños agricultores, 100 tractores y US \$100 millones para programas de vivienda, además de otros apoyos destinados a programas de salud, educación y asistencia en tecnología, sobre todo para realizar exploraciones de petróleo. Esos avances sociales son una de las raíces de su inmenso apoyo popular.

En un informe oficial del gobierno de Zelaya se afirma: “La Red Solidaria, la matrícula gratis, la merienda escolar, (...) el bono solidario, la reducción del precio y el subsidio de los combustibles, el rescate de las empresas públicas: ENEE y Hondutel; la baja en la tasa de interés bancario, el bono tecnológico agrícola, la sustitución gratuita de bombillos ahorradores de energía, los programas masivos de alfabetización, el financiamiento a la microempresa, la veda en el corte del bosque, la prohibición de la minería a cielo abierto, la energía eléctrica gratuita para las 700 mil familias más pobres del país, el rescate de la Base Militar de Palmerola para un aeropuerto civil, el incremento de las reservas internacionales, la oposición a la devaluación de la moneda (lempira) frente al dólar, la incorporación a Petrocaribe y al ALBA, y el incremento en un 60% del salario mínimo a toda la clase trabajadora, aumentado de \$150 a \$230 dólares americanos al mes, el programa de Gerencia por Resultados y el Plan Nacional de Desarrollo a 30 años, son sólo una muestra de las acciones del Gobierno en beneficio del interés nacional y sobre todo de los más pobres. El Gobierno del Presidente Zelaya está lejos de ser un gobierno populista. Al contrario, promovió fuertemente la inversión privada tanto extranjera como nacional, a través de incentivos de varios tipos y de la suscripción de Tratados de Libre Comercio (TLC). No se nacionalizó ni expropió una sola empresa ni hondureña, ni extranjera”. (Informe del gobierno de Zelaya sobre el Golpe).

Lo que rebasó la copa de la mezquina oligarquía que controla el país fue una propuesta basada en la Ley de Participación Ciudadana, dictada bajo su gobierno. Esa ley señala que los ciudadanos pueden pedir al presidente que haga una consulta ciudadana no vinculante sobre temas que

se estimen de interés. Dichas consultas debe hacerlas el Instituto Nacional de Estadística y no tienen otro objetivo que conocer lo que el ciudadano común piensa. Más de 400 mil personas le solicitaron que consultara la opinión de la gente sobre una Asamblea Constituyente. El día en que se produjo el golpe de Estado se iba a preguntar: “¿Está usted de acuerdo que en las elecciones generales de noviembre del 2009 se instale una Cuarta Urna en la cual el pueblo decida la convocatoria a una Asamblea Constituyente?” “Sí... No...”

La Cuarta Urna era la que se agregaría a las tres urnas en que se deposita el voto en las elecciones generales del 28 de noviembre: una es para la votación por Presidente de la república, otra para parlamentarios y la tercera para alcaldes y regidores. El período de Zelaya terminaba en enero de 2010 sin posibilidad alguna de reelección, la cual está explícitamente prohibida por la Constitución, de modo que lo relativo a la eventual convocatoria a una Asamblea Constituyente lo habría tenido que manejar su sucesor. No parecía una amenaza a la estructura de poder del país, pues aunque la opinión se inclinara por la Cuarta Urna, todavía había que elegir la Constituyente, la derecha hubiera podido fácilmente predominar en ella y esto todo se haría bajo un nuevo gobierno manejado por los partidos tradicionales, ya que el Partido Unidad Democrática –de izquierda– no tenía posibilidades reales de acceder ni al gobierno ni al Congreso. Por su parte, Zelaya representaba sólo a un sector del Partido Liberal y no podía ser reelegido. El escenario de la lucha política era favorable para la derecha, que además controla todas las instancias de poder, pero a pesar de eso decidieron dar un golpe de Estado.

Pareciera una reacción exagerada a la amenaza que representaba Zelaya, por eso es necesario encontrar las razones del

golpe y de la evolución de la situación posterior, no solamente en los factores internos sino en el contexto internacional, la omnipresencia de la política estadounidense y la evolución reciente de la situación continental. Esto puede esclarecerse al examinar los acontecimientos recientes.

Los intereses de las empresas maquiladoras, los laboratorios farmacéuticos y el TLC

Por ser un país pequeño podría pensarse que no tiene importancia para Estados Unidos, sin embargo, una carta enviada por seis asociaciones de empresarios estadounidenses a Obama revela la magnitud de los intereses en juego¹. Los empresarios señalan que Honduras es el tercer mayor receptor de exportaciones de telas y paños de Estados Unidos, cuyas ventas a ese país alcanzaron la suma de US \$1.400 millones, del total de cinco mil millones de exportaciones durante 2008. Estos suministros se maquilan allí y se reexportan, lo cual convierte a Honduras en el cuarto suministrador de confecciones a Estados Unidos. En medio de la inestabilidad política propia del golpe, los empresarios llamaron la atención de Obama sobre la necesidad de mantener las cercanas relaciones económicas con ese país². Estas empresas podrían estar detrás del golpe.

Las maquilas ocupan a miles de personas y se aprovechan del único factor con el cual el país centroamericano puede competir en el mercado mundial: la mano de obra barata, que con frecuencia aprovecha el trabajo infantil y la superexplotación de la mano de obra femenina. Muchas de esas maquilas son de empresarios de Taiwán y Corea. Las maquilas se ubican

en zonas francas especiales, llamadas Zonas Industriales de Procesamiento, de las cuales hay 21 y 14 Zonas Libres de Procesamiento (ZOLI), donde operan unas 216 empresas, las cuales están exoneradas de impuestos y regulaciones. Los maquiladores allí instalados tienen “beneficios fiscales que les perdonan los pagos de impuestos arancelarios, de servicios administrativos aduaneros, derechos consulares, impuestos para la importación de materia prima, maquinaria, equipo, herramientas y demás impuestos y gravámenes relacionados directa o indirectamente con las operaciones aduaneras de importación y exportación y hasta el impuesto sobre la renta”.

En las empresas maquiladoras trabajan cerca de 120 mil trabajadores(as). De este número el 75%, es decir 90.000 plazas, son ocupadas por mujeres, con edades que promedian entre 18 y 22 años; el 65% proceden del área rural. La jornada de trabajo promedio es de 9 horas, pero normalmente se obliga a trabajar horas extras en pésimas condiciones laborales, sin protección, seguridad, con acoso sexual y violencia física y verbal. Son constantes las denuncias por despidos injustificados, negación de atención pre y post natal, violación al derecho de organización y negación para recibir servicios de salud. Con la crisis económica de Estados Unidos, en lo que va del 2009, 20.000 personas han quedado desempleadas.

Un informe del Banco Central de Honduras (BCH) revela que durante 2008 las exportaciones de bienes para transformación alcanzaron un valor de US \$3.559,5 millones, superior en 8,6 puntos porcentuales a lo observado en 2007, cuando sumaron US \$3.223,3 millones.

Contribuyeron a este comportamiento el mayor dinamismo de las ventas de la industria textil, mostrando un crecimiento interanual de 13,7%, principalmente en

productos de tejidos de punto, hilados y tejidos de fibras textiles, y prendas de vestir. Mientras que las exportaciones de maquinaria y el aumento de las exportaciones se concentraron en el dinamismo experimentado por las ventas de productos textiles, que constituyen el 87,8% del total exportado.

A pesar de ese éxito exportador, los estudios señalan que las exportaciones de Honduras crecieron en volumen, pero las importaciones las superan y se profundiza el déficit comercial con EEUU. El autor de un reciente estudio encontró que “el CAFTA, me parece, benefició más las importaciones de Estados Unidos hacia Honduras³.”

Por otra parte, el TLC con Estados Unidos ha beneficiado ampliamente a esta potencia, pues mientras que en 2005 sin TLC Honduras tenía superávit comercial con EEUU de US \$220 millones, este superávit se redujo a US \$74 millones y en tal lapso las compras a Estados Unidos se duplicaron en sólo tres años y el aumento en las exportaciones hondureñas se debió al café y banano, productos que no se benefician del TLC, ya que desde hacía muchos años tenían preferencias arancelarias en el marco de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe y del Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias. Honduras triplicó la compra de productos lácteos de Estados Unidos y duplicó la compra de granos, carne de res, cerdo y pollo, arroz y muchas materias primas agrícolas. Además la inversión extranjera directa disminuyó en 2008 en 5,7%⁵ y la inflación ha mantenido un constante incremento en los últimos tres años.

Pero no solamente son los dueños de las maquilas los preocupados por Honduras. Más del 80% de los medicamentos son provistos por empresas multinacionales, siendo la materia prima para su producción 100% importada, principalmente desde EEUU y Europa⁴.

La concreción de un acuerdo comercial establecido por los gobiernos de Cuba y Honduras tras el ingreso al ALBA incluyó como una de las principales temáticas de intercambio la importación de medicamentos genéricos desde la isla caribeña como forma de contrarrestar los altos precios de las medicinas que el Estado hondureño debe costear para la provisión de sus hospitales públicos.

A principios de 2009 el gobierno de Honduras intentó comprar medicinas genéricas aprovechando los acuerdos establecidos por el ALBA, pero se encontró con un escollo interpuesto por las transnacionales a través del Colegio Químico Farmacéutico, el cual argumentó aspectos burocráticos para hacer caer las importaciones provenientes de Cuba a precios asequibles: los intereses del poderoso lobby farmacéutico norteamericano y europeo no permitirían la competencia de la industria cubana o de otras industrias nacionales farmacéuticas en el mercado de las medicinas de Honduras.

Como detonante final de las acciones desestabilizadoras, un hecho más colmaría la paciencia de los intereses privados transnacionales farmacéuticos: el 24 de junio los presidentes del ALBA se “comprometieron a promover un modelo de apropiación social del conocimiento que permita superar los obstáculos en la producción de bienes fundamentales para la vida, como la alimentación y la salud”.

El golpe militar

Según Juan Barahona, del Frente de Resistencia, en entrevista concedida el 28 de junio: “El golpe de Estado se inicia desde que el presidente Manuel Zelaya Rosales, presidente constitucional de Honduras, informa al pueblo hondureño y avisa de una consulta popular que se llevaría a cabo el día de hoy, 28 de junio.

Esta consulta era para pedir la opinión del pueblo si está de acuerdo o no que en las elecciones generales de noviembre de este año se instale una cuarta urna. Todas las instituciones del Estado, desde el Congreso, la Procuraduría General de la república, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el poder judicial, dicen que esa consulta es ilegal. Por eso el Presidente cambia el decreto y crea una encuesta de opinión, que generó en una campaña en contra de esta encuesta por todos los medios de comunicación, descontroló a los grupos de poder y el juez dictó que es ilegal. El miércoles de esta semana, el Presidente de la república destituyó al general Romeo Vásquez, quien era el jefe del Estado Mayor Conjunto, lo separó de su cargo y al día siguiente el ministerio público decomisó las urnas y las papeletas que se utilizarían en la encuesta de opinión. Este material permaneció en una bodega de la fuerza aérea hondureña. El presidente Zelaya convoca al pueblo y las organizaciones populares a la casa presidencial a las 12 del mediodía, para que éste lo acompañe a la fuerza aérea. En la fuerza aérea, una gran manifestación ingresó junto al Presidente para rescatar las 15.000 urnas que permanecían en una bodega de la fuerza aérea. Esto ocurrió el jueves. El viernes y sábado, los hondureños considerábamos que el golpe de Estado se había alejado... A las 6 de la mañana de hoy (28 de junio) nos informan desde la residencia del Presidente que militares ingresaron a la casa de habitación realizando disparos a las puertas y paredes con metrallas, por lo que se comunica con todo el pueblo para concentrarse en la casa de gobierno”.

La Corte Suprema lo acusó de diversos delitos, pero todo esto no pudo ocultar el hecho de que en todo el procedimiento se había violado flagrantemente la Constitu-

ción, la cual obviamente no contempla la posibilidad de asaltar la casa de gobierno, llevarse al Presidente y dejarlo en territorio extranjero.

El Congreso se reunió el 28 de junio sin quórum y se comenta que en la filmación de la sesión aparecen votando los empleados del Congreso, quienes fueron filmados de espaldas. A esta sesión sólo se invitó a los partidarios del golpe y en adelante se hostigó y amenazó a los de la oposición, principalmente a los de Unificación Democrática que desde el comienzo apoyaron a Zelaya.

La reconstrucción minuciosa de los hechos, muestra algo que ya es aceptado por la comunidad internacional. Éste fue un golpe militar violatorio de la Constitución, el cual instauró un régimen de facto con apariencia civil que no hubiera tenido éxito sin el apoyo de los militares que tienen fuertes entronques con Estados Unidos.

El papel de Estados Unidos y la comunidad internacional

La reacción de la Comunidad Internacional fue inmediata y unánime. La OEA la suspendió como miembro, la Asamblea General de la ONU condenó el golpe y exigió la inmediata restitución de Zelaya, el SICA, la Unión Europea, Caricom, el Grupo de Río condenaron el golpe. Los gobiernos del ALBA anunciaron sanciones económicas. El BID y el Banco Mundial anunciaron suspensión de la ayuda financiera que otorgaban. Todos los embajadores de la Unión Europea se retiraron. Los países del Sistema de Integración Centroamericana cerraron las fronteras durante 48 horas. El Fondo Monetario Internacional, después de haber puesto a disposición de la dictadura derechos especiales de giro por US \$150 millones, cambió su decisión y los ofreció a Zelaya.

El único gobierno que no hizo una condena inmediata fue el de Estados Unidos. Inicialmente Obama señaló su preocupación, manifestando su esperanza de que se “respeten las normas democráticas”. Poco después el asesor para asuntos de América Latina ante la Casa Blanca, Dan Restrepo, fue entrevistado por CNN en español y reiteró la “preocupación” del presidente Obama frente a la situación en Honduras. No condenó al golpe de Estado, ni siquiera aceptó que un golpe de Estado había ocurrido. Restrepo indicó que Washington estaba en comunicación con “fuerzas democráticas” en Honduras y cuando fue preguntado por un reportero de CNN sobre la posibilidad de que Washington reconociera otro Presidente diferente a Zelaya en Honduras, Restrepo eludió la pregunta. Después de muchas dudas Estados Unidos se sumó a la resolución de condena de la ONU. Pareciera que hubieran sido tomados por sorpresa, pero no era así.

Hugo Llorens, el embajador estadounidense en Honduras, había sido acusado por Zelaya de injerencia en los asuntos internos del país. En una carta que envió a Obama en diciembre de 2008 y Otto Reich, ex subsecretario de Estado de Bush, había adelantado una campaña contra Zelaya, acusándolo de corrupción por no adjudicar una licitación de telecomunicaciones a una empresa que él representaba e inmediatamente después del golpe fue uno de los más enconados defensores del nuevo gobierno. A raíz de la entrada de Honduras en el ALBA, el año pasado, en una entrevista con medios hondureños, Reich hizo una amenaza velada: “Si el presidente Zelaya quiere ser un aliado de nuestros enemigos, debe pensar que pueden haber consecuencias para sus acciones y palabras”. Hay decenas de pruebas de que la derecha republicana actuó, durante el

gobierno de Bush y después, en contra del gobierno de Zelaya.

En el mes anterior al golpe contra el presidente Zelaya se formó una coalición entre organizaciones no gubernamentales, empresarios, partidos políticos, la iglesia católica y los medios de comunicación, denominada la “Unión Cívica Democrática”. Su único propósito era derrocar al presidente Zelaya para impedir que abriera el camino a una asamblea constituyente que permitiría al pueblo alzar su voz y participar en su proceso político. La “Unión Cívica Democrática” de Honduras está compuesta por organizaciones como el Consejo Nacional Anticorrupción, el Arzobispado de Tegucigalpa, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), el Consejo de Rectores de Universidades, la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), el Foro Nacional de Convergencia, la Federación Nacional de Comercio e Industrias de Honduras (Fedecámara), la Asociación de Medios de Comunicación (AMC), el Grupo Paz y Democracia y el grupo estudiantil Generación X Cambio. La mayoría de estas organizaciones han sido beneficiarias de los más de US \$50 millones que anualmente invierten la Usaid (Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos) y la NED** en el “desarrollo democrático” en Honduras. De hecho, un informe de la Usaid sobre su financiamiento y trabajo con Cohep, destaca que “el perfil bajo de la Usaid en este proyecto ayudó a asegurar la credibilidad de Cohep como una organización hondureña y no un brazo de la Usaid. Cuando sucedió el golpe fueron los primeros que salieron a decir que no hubo un golpe de Estado, sino que habían ‘rescatado su democracia’ de las manos del presidente Zelaya”.⁶

Por cierto, el ex candidato republicano John McCain fue el anfitrión de un grupo de representantes del golpismo

hondureño que por su invitación acudieron a Washington a tratar de convencer a los congresistas estadounidenses de su "legalidad" y la Usaid, tiene entre sus recipientes de jugosos donativos al Cohep, Consejo Hondureño de Empresas Privadas, un viejo adversario del gobierno del presidente Manuel Zelaya, entidad que también está detrás de la asonada.

A finales de septiembre, la dictadura contrató a la firma Chlopak, Leonard, Schecther y Asociados para adelantar una campaña de publicidad de un cuarto de millón de dólares para presentar la dictadura como si fuera una democracia. Ernesto Zedillo, Gonzalo Sánchez de Losada y Álvaro Uribe Vélez estuvieron entre los clientes recientes de esta firma.

Lo nuevo tiene que ver no con la actuación de esos caracterizados halcones que junto con John Negroponte están detrás de todas las conspiraciones de la última década contra gobiernos democráticos en América Latina, sino con la actuación de funcionarios del nuevo gobierno de Obama. La semana anterior al golpe, los subsecretarios de Estado James Steinberg y Thomas Shannon viajaron a Honduras y sostuvieron reuniones con personalidades civiles y militares de la oposición a Zelaya: luego admitieron haber hecho el viaje, pero dijeron que el propósito del mismo era más bien "detener" el complot. Los contactos que Llorens reconoce haber tenido con los militares antes del golpe, demuestran entonces que Estados Unidos conocía de antemano la situación y no alertaron a Zelaya.

*** La Fundación Nacional para la Democracia, (en inglés: National Endowment for Democracy, más conocida por sus siglas en inglés NED), es una organización estadounidense fundada en 1983 que afirma ayudar a los grupos que están a favor de la democracia en el continente americano, específicamente en América Latina. Aunque está administrada por una organización privada, la mayoría de sus fondos provienen del Congreso estadounidense y es un medio para apoyar los grupos pronorteamericanos.*

La Secretaria de Estado Hilary Clinton, en sus declaraciones del domingo 28 de junio no habló de un "golpe" ni exigió la restitución del Presidente depuesto; solamente hizo una eufemística referencia a "las dos partes" de un conflicto y el 1º de julio los voceros del Departamento de Estado describieron lo ocurrido en Honduras como "un esfuerzo coordinado entre los militares y algunos actores civiles... para sustituir al titular de la Presidencia".

Hilary Clinton admitió: "La acción contra el presidente hondureño Mel Zelaya viola los principios de la Carta Democrática de la OEA y debe ser condenada...". Pero luego señaló que "Llamamos a todas las partes en Honduras a que respeten el orden constitucional y el Estado de derecho, que reafirmen su vocación democrática y se comprometan a resolver las disputas políticas de manera pacífica a través del diálogo". Con estas frases comenzó todo un proceso del gobierno de Obama para obstaculizar la adopción de sanciones al gobierno de facto, legitimar veladamente a los golpistas y considerar a Zelaya no como el representante del gobierno legítimo, sino como una parte más del conflicto. La otra serían los golpistas.

Otra prueba de los vínculos de la administración Obama con el golpe fue la contratación que hicieron los golpistas del abogado Lanny Davis, consultor jurídico de Bill Clinton durante su presidencia, y asesor e íntimo amigo de Hilary Clinton. Davis fue contratado por la sucursal hondureña del Consejo de Empresarios de América Latina (CEAL) para hacer lobby a favor de los golpistas y organizar una ofensiva diplomática y mediática, incluyendo reuniones con diputados, senadores y otros funcionarios. Davis está trabajando junto con Bennett Ratcliff, otro cabildero con cercana relación a Hilary Clinton y quien fue ejecutivo de alto rango para una de las compañías de relaciones

políticas y públicas más influyentes en Washington. Frente a los esfuerzos de mediación realizados por el presidente costarricense Óscar Arias, el gobierno de facto no dio ningún paso sin antes consultarle a Ratcliff, según informó el *New York Times*.

De hecho, el gobierno estadounidense primero retiró la visa a cuatro funcionarios, incluyendo a Micheletti, el general Romeo Vásquez y el procurador de Derechos Humanos Ramón Custodio. Después canceló la visa diplomática al mismo Micheletti y a los miembros de la Corte Suprema, pero no suspendieron los acuerdos de cooperación militar, no embargaron cuentas bancarias y hasta la fecha, han eludido el reconocimiento legal de la ocurrencia del golpe de Estado que obligaría al gobierno norteamericano a tomar medidas más drásticas.

El presidente Obama hubiera podido ordenar al Departamento del Tesoro de EEUU que congelara las cuentas bancarias personales de los líderes del golpe y sus activos y los de sus partidarios. Podría también implementar sanciones comerciales, teniendo en cuenta que el 70% de las exportaciones hondureñas van al mercado estadounidense. Las declaraciones de los funcionarios siguen siendo ambiguas y califican el golpe como una situación compleja debido al apoyo que tuvo del Parlamento y la Corte Suprema.

Los militares hondureños tienen una larga historia de relaciones con Estados Unidos. Entre 2001 y 2008, la "Escuela de la Américas" calificada de "Escuela para Golpes" entrenó a 431 oficiales hondureños y para este año de 2009 tiene en proyección incluir a otros 88, según reconoció Lee Rials, oficial de relaciones públicas de SOA/Whinsec (Escuela de las Américas).

Aunque la Ley de Apropiações para Operaciones en el Exterior de EEUU plantea

que la ayuda militar y el entrenamiento deben suspenderse cuando existe un golpe de Estado, y el propio presidente Barack Obama calificó así a lo ocurrido en Honduras contra el presidente Manuel Zelaya, Rials confirmó que se mantienen al menos dos oficiales hondureños en el Curso de Mando y Personal, afirmando: "Bueno, todo lo que sé es que ellos están aquí, y ellos están en clases". A lo que agregó que la decisión de continuar entrenando a hondureños es "puramente una política de gobierno", y probablemente no era SOA "el único lugar" donde estudian militares hondureños. Es tan estrecha la relación entre los militares hondureños y los estadounidenses que los militares hondureños no hacen nada sin una aprobación de los Estados Unidos.

Si agregamos a los poderosos cabilderos del bando de Clinton, los miembros del partido republicano en el Congreso estadounidense y los conservadores en el Departamento de Estado, el gobierno golpista tiene bastante apoyo de Washington.

La Millenium Challenge Corporation, cuya presidenta es Hilary Clinton, otorgó US \$6,5 millones al gobierno de facto después del golpe (Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos): US \$0,9 millones el 9 de julio, US \$0,3 millones el 16 de julio US \$3,7 millones el 23 de julio y US \$1,6 millones el 30 de julio. Registros del Banco Central de Honduras lo revelan, a pesar de que el Departamento de Estado, en boca de la misma Clinton, afirmó que esta ayuda había sido suspendida.

La base militar de Soto Cano (Palmerola)

Honduras juega un importante papel en el despliegue del dispositivo militar estadounidense en el hemisferio. La base Soto Cano se convirtió en un punto

clave para las operaciones militares de esa potencia, cuando fue cerrada la base de Howard en Panamá en 1999. Como es usual en este tipo de bases, los norteamericanos tienen inmunidad que los exime de ser juzgados por la justicia local. La base es operativa desde 1983 y fue utilizada por el tristemente célebre coronel estadounidense Oliver North como base de operaciones de la “contra”, fuerzas paramilitares entrenadas y financiadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) encargadas de ejecutar la guerra contra los movimientos izquierdistas en Centroamérica. Desde Soto Cano, la “Contra” lanzaba sus ataques, escuadrones de la muerte y misiones especiales que dieron como resultado miles de asesinatos, desaparecidos, torturados, lisiados y aterrorizados en Centroamérica.

La base de Soto Cano es la sede de la “Fuerza de Tarea Conjunta Bravo” (JTF) de Estados Unidos, compuesta por efectivos del ejército, las fuerzas aéreas, fuerzas de seguridad conjuntas y el primer batallón-regimiento número 228 de la aviación estadounidense. Son aproximadamente 600 personas y 18 aviones de combate, incluidos helicópteros UH-60 Black Hawk y CH-47 Chinook. Soto Cano también es la sede de la Academia de la Aviación de Honduras. Más de 650 ciudadanos hondureños y estadounidenses viven dentro de las guarniciones de la base.

La Constitución de Honduras no permite legalmente la presencia militar extranjera en el país. Sin embargo, un acuerdo entre Washington y Honduras autoriza la importante y estratégica presencia de los cientos de militares estadounidenses en la base de forma “semipermanente”. El acuerdo se efectuó en 1954 como parte de la ayuda militar que Estados Unidos ofrecía a Honduras. Todos los años Washington autoriza cientos de millones de dólares de ayuda militar y económica a Honduras.

El 31 de mayo de 2008, el presidente Manuel Zelaya anunció que Soto Cano (Palmerola) se utilizaría para vuelos comerciales internacionales. La construcción del terminal civil está siendo financiada con recursos del ALBA.

El comandante de la aviación de Honduras, general Luis Javier Prince Suazo, estudió en la famosa Escuela de las Américas de Estados Unidos en 1996. El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vásquez, destituido por el presidente Zelaya el 24 de junio por desobedecer sus órdenes, y luego actor principal en el golpe militar pocos días después, también es graduado de la Escuela de las Américas.

Aunque Honduras depende económicamente de Estados Unidos, durante los últimos meses la relación diplomática entre ambos países comenzó a deteriorarse. En noviembre de 2008, el presidente Zelaya felicitó al presidente Obama por su victoria electoral, calificándola como “una esperanza para el mundo”. Pero dos meses después, Zelaya envió una carta personal a Obama, en la que acusaba a Estados Unidos de “intervencionismo” y llamaba al nuevo gobierno a “respetar los principios de no injerencia en los asuntos políticos de otras naciones”. Zelaya también exhortó al presidente Obama a “revisar los procedimientos de inmigración y la concesión de visas como un mecanismo de presión contra personas que tengan creencias distintas e ideologías que no representan ninguna amenaza para Estados Unidos”. Adicionalmente, el presidente hondureño le comentó que “la lucha legítima contra el narcotráfico... no se debe utilizar como una excusa para imponer políticas intervencionista en otros países”. Poco después Zelaya, junto con el presidente Daniel Ortega de Nicaragua, boicoteó una reunión del Sistema de Integración de Centro América (SICA), en la que iba a estar presente el vicepresidente estadounidense Joe Biden.

Obviamente, Washington no quería arriesgarse al cierre de su base militar y a la expulsión de sus 600 efectivos militares. Además, la mayoría de las fuerzas armadas hondureñas y los altos oficiales que han participado en el golpe son aliados y socios importantes del Pentágono. Las actuaciones del presidente Zelaya de construir un terminal civil en Soto Cano y autorizar vuelos internacionales comerciales, a pesar de que había ofrecido abrir una base de reemplazo en la Mosquitia, se podrían entender fácilmente como una amenaza para el futuro de la presencia militar estadounidense en Honduras y es indiscutiblemente una de las raíces del golpe. Durante el golpe y después de él la base se ha mantenido, cosa que es presentada por los golpistas como una prueba del apoyo de Estados Unidos.

La dimensión de la reacción a las decisiones del presidente Zelaya sobre la base de Palmerola tiene relación con la decisión del presidente Rafael Correa de cerrar la base de Manta. Ambas limitaban la presencia militar norteamericana en el continente justamente en dos de los países que integran el ALBA.

La mediación de Oscar Arias

A pesar de la condena de la comunidad internacional y de la indómita resistencia del pueblo, la dictadura se mantiene. En eso tiene mucho que ver la forma como la administración Obama ha manejado la situación. Inmediatamente después del golpe el presidente costarricense Oscar Arias, recogió a Zelaya en el aeropuerto y dieron juntos la primera rueda de prensa de las muchas que Zelaya ha dado desde que fuera secuestrado. Enseguida Zelaya fue a Managua, capital de Nicaragua, para una reunión de la ALBA convocada con carácter urgente.

Días después Manuel Zelaya partió a Washington para hablar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pocos días antes de su intento de regresar a Honduras junto con el presidente de la Asamblea General de la ONU, Miguel D'escoto, retornó frustrado por los militares golpistas.

Después del intento pasó un día en Nicaragua antes de partir de nuevo a Washington, donde se reunió con la secretaria de Estado Hilary Clinton. De allí en adelante ha viajado a numerosos países, los cuales lo han tratado con la dignidad de Jefe de Estado.

Después se planteó una reunión entre Zelaya y los golpistas mediada por Oscar Arias. Refiriéndose a ese 'encuentro', Zelaya señaló que no era una negociación sino "una planificación de cómo los golpistas van a salir del país". Recalcó igualmente que hay cosas innegociables, como su presidencia y la celebración de las elecciones para la Cuarta Urna que abran la puerta a una Asamblea Nacional Constituyente.

La mediación de Arias se convirtió desde entonces en una forma de dilatar la restitución del gobierno de Zelaya, de anular el papel de la OEA que se salió del libreto de Washington al hacer una condena tajante del golpe y de dar una salida a los golpistas. De hecho, Costa Rica ha jugado como el principal agente de Washington en el proceso y una muestra de ello está en que en la propuesta de condena a Micheletti en la ONU no participó Costa Rica. Por lo demás, el Frente Nacional de Resistencia al Golpe ha criticado la mediación como una maniobra dilatoria. Lo que están cocinando es un restablecimiento de Zelaya sin darle capacidad de transformar el régimen político prevaleciente y sacrificando los anhelos democráticos de la población. Se trata de una violación de las resoluciones de todos los organismos

internacionales, pues una cosa es el restablecimiento inmediato e incondicional y otra una "salida negociada". El papel de Arias es complementario con el de Uribe Vélez, quien sostuvo reuniones con representantes de los golpistas e hizo llegar a ellos "pruebas" sacadas del computador de Raúl Reyes en las cuales se relaciona a la izquierda hondureña con las FARC, cosa que pretende criminalizar y deslegitimar al movimiento popular de ese país.

La mediación de Arias consistió en elaborar una propuesta de doce puntos que intentó negociar con los golpistas y cuyo eje era el restablecimiento de Zelaya. Estos puntos incluían: la creación de un gobierno de unidad nacional, amnistía para delitos políticos relacionados con el golpe del 28 de junio y que Zelaya abandone los planes de reformar la Constitución. Además estipulan el adelanto de los comicios de ese país y el retorno de los poderes del Estado. Aunque la propuesta es inaceptable para ambas partes, ha recibido un particularmente vehemente rechazo de los golpistas.

El 21 de septiembre Zelaya apareció súbitamente en la embajada de Brasil en Tegucigalpa. Esto tuvo el efecto de avivar la resistencia popular que durante varios días rodeó dicha embajada y prosiguió con renovados bríos las protestas. El gobierno de facto intensificó la represión, declaró durante varios días casi en forma permanente el toque de queda, suspendió por 45 días las garantías constitucionales a las libertades públicas y detuvo e hirió a decenas de dirigentes. Cerró radio Globo y el canal Choluta Sur, únicos medios que expresaban apoyo a Zelaya. Micheletti impidió la entrada a Honduras de cuatro diplomáticos de la OEA y dio un ultimátum a Brasil para definir el estatus de Zelaya en la embajada, ante lo cual Lula respondió que "Brasil no cumplirá un ultimátum de un gobierno de golpistas". Las autorida-

des *de facto* anunciaron que no recibirían a los embajadores de España, Argentina, México y Venezuela, que tenían previsto volver al país después de que la OEA y la Unión Europea tomaran la decisión de hacer regresar a los jefes de misión que abandonaron Honduras tras el golpe de Estado. Además, el Gobierno indicó en un comunicado que los funcionarios de los países que optaron por mantener las relaciones a nivel de misiones concurrentes, como es el caso de España, tienen restringidos los privilegios propios de los agentes diplomáticos y deben retirar los distintivos y banderas que identificaban sus Estados en las Embajadas. Estas medidas suscitaron una nueva oleada de repudio internacional al régimen *de facto* y de respaldo a la resistencia.

Mientras que el Grupo de Río reiteró su posición de retorno de Zelaya y condenó a la dictadura, el gobierno de Estados Unidos continuó con sus ambigüedades hasta el punto que, estando Zelaya prácticamente preso en la embajada, el embajador de EEUU ante la OEA, Ameselem, declaró que Zelaya "tiene que portarse como un líder y enviar mensajes claros que expresen puntos de vista de manera pacífica, tiene que dejar de hacer acusaciones y de actuar como si fuese una estrella de cine".

Además, el Comando Sur de EEUU invitó al ejército de Honduras a las operaciones militares Panamax, en las cuales se realizó un simulacro de respuesta a atentados terroristas en altamar. Perú, por su parte, le vendió bombas lacrimógenas a Micheletti para reprimir las movilizaciones. Los países de la Unión Europea han actuado divididos pues, por ejemplo, mientras que Bélgica mantiene la representación de los golpistas, España prohibió la entrada a su país de representantes de ellos. Como producto de la resistencia popular y la solidaridad internacional, el gobierno golpista anunció que sometería a juicio

a quienes sacaron a Costa Rica a Zelaya y levantó la suspensión de las garantías constitucionales. Micheletti anunció que podría considerar el retorno de Zelaya después de las elecciones, pero aunque todo el mundo ha anunciado que no reconocerá la legitimidad de las elecciones previstas para el 29 de noviembre y a las cuales no asistirán los candidatos de la oposición, el régimen *de facto* se obstina en mantener la fecha. De todas maneras, destacados analistas prevén que el régimen no podrá mantenerse hasta esa fecha e incluso se especula sobre una eventual y nefasta entrada de los cascos azules de la ONU a ese país.

Zelaya ha adelantado en la embajada contactos con diversos sectores políticos del país y es previsible también que la unanimidad en torno al apoyo al golpe se rompa y en medio de su desespero la clase política y empresarial de Honduras le quite progresivamente su apoyo a Micheletti.

“Nos tienen miedo porque no les tenemos miedo”

El pueblo de Honduras ha escrito páginas imborrables en la lucha por la democracia y la resistencia a la dictadura. Ha realizado manifestaciones multitudinarias desde el primer día y ha recurrido a la mayor iniciativa y creatividad del movimiento social, hasta el punto que es conocido como “los incansables”. Ha cerrado carreteras, se ha tomado poblaciones, ha protestado ante el Parlamento, la casa de gobierno, la embajada de EEUU, ha realizado caravanas, ha constituido un Frente de Resistencia contra el golpe y ha dado lecciones a todo el continente de cómo se realiza una resistencia civil, masiva, pacífica y unitaria. La heroica gesta de las y los hondureños, no tiene anales en la historia reciente de América

Latina. Numerosos grupos feministas se han agrupado en “Feministas en Resistencia” y han jugado un papel particularmente activo.

La represión desde que los golpistas constituyeron la dictadura, según palabras de la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, se ha endurecido, alcanzando altas cotas de violencia. Las garantías constitucionales han sido suspendidas en varias oportunidades, por lo que asesinar, entrar en las casas sin orden judicial, espiar llamadas... es legal, mientras que manifestarse o expresarse pública y pacíficamente es ilegal.

Desde el primer día las manifestaciones, primero espontáneas y luego organizadas, han sido duramente reprimidas dejando miles de heridos, detenidos y varios muertos. Esto puede observarse de manera muy clara cuando el pueblo asistió en una multitudinaria manifestación de casi medio millón de personas a recibir al presidente Zelaya en su regreso a Honduras al aeropuerto de Tocatín, en Tegucigalpa.

Desde la histórica toma del aeropuerto cuando miles de manifestantes acudieron a recibir a Zelaya, hasta las tomas de carreteras de entrada a Tegucigalpa y las manifestaciones cuando regresó Zelaya, hay toda una epopeya. También se ha mantenido la reacción represiva del régimen. En la primera manifestación se produjo un muerto y más de dos decenas de personas heridas. Isis Obed Murillo, un joven de dieciséis años, fue abatido por un francotirador. Poco después de estos hechos se anunció, cuando faltaban diez minutos para las seis de la tarde, que se establecía un toque de queda a esa misma hora, lo que supuso más de 800 detenidos.

La represión ejercida contra la ciudadanía no sólo se lleva a cabo durante las manifestaciones, sino que antes de



celebrarse, el ejército persigue a quienes identifica como partidarios de Zelaya. Detiene autobuses y vehículos particulares que transportan “sospechosos”, distinguidos por su apariencia de pobres.

El gabinete presidencial que apoya a Zelaya pasó a la clandestinidad, altos mandos del ejército que dieron la espalda al golpe están en las cárceles y muchos alcaldes han sido perseguidos, algunos salvados por el propio pueblo que desde el primer momento fue a los ayuntamientos a protegerlos de las arremetidas del ejército y otros –pese a la protección popular– fueron detenidos, como el alcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Suncery.

La familia de Manuel Zelaya también está siendo perseguida y haciendo una demostración de valentía, Xiomara Castro, la esposa de Zelaya, ha salido de “las montañas” donde la protegía el pueblo para manifestarse pacíficamente con la ciudadanía en su lucha diaria por restaurar la democracia.

Los golpistas han constituido una dictadura de terror, reactivando, según el gabinete presidencial en la clandestinidad,

el Escuadrón de la Muerte 316 y nombrando como asesores de su “gobierno” a asesinos como Billy Joya, quien dirigió al tristemente famoso Escuadrón de la Muerte 316, el cual hizo desaparecer a decenas de personas de izquierda durante los años 80. Billy Joya está acusado por tribunales internacionales de responsabilidad criminal directa en 16 desapariciones y asesinatos. Todo esto, junto con la represión, la censura, las amenazas y la suspensión de las garantías constitucionales, califica el gobierno golpista de Honduras como uno que practica el terrorismo de Estado.

Los hondureños contrarios al golpe, el pueblo, nada más saber el secuestro de su Presidente salieron a las calles y comenzaron a organizarse y unirse para encauzar las protestas, mantenerlas y acrecentarlas. Con ese objetivo se creó en las horas siguientes al golpe, el Frente de Resistencia Popular, integrado por las tres Centrales Obreras, el Sindicato de Taxistas, El Copinh, los sindicatos magisteriales del país, la mayor organización de campesinos hondureña “Vía Campesina” y el único partido de izquierda en Honduras,

Unificación Democrática.

Desde el primer día el Frente tuvo claro que los objetivos de su lucha eran restituir al presidente Zelaya en su cargo, juzgar a los golpistas y, sobre todo, realizar las elecciones que fueron interrumpidas por el golpe de Estado.

Para ello el Frente de Resistencia Popular llamó al pueblo para que se tomase las calles y ha realizado varias huelgas generales que han paralizado todo el país asfixiando económicamente a los golpistas quienes, pese a que en un primer momento negaron la existencia de huelgas, tuvieron que reconocerlo, llamando a los trabajadores a volver a sus labores, ya que la mayoría de gasolineras, supermercados, restaurantes y todos los colegios públicos se encontraban cerrados.

Poco a poco a cambio del simple restablecimiento de Zelaya, el movimiento popular ha venido planteando un programa de cambios que incluyen desde la reforma constitucional que asegure una participación popular en la vida del país, hasta cambios reales en la estructura social inequitativa.

La resistencia hondureña ha sido acompañada por decenas de organizaciones y redes internacionales. La Alianza Social Continental ha coordinado la visita de varias

delegaciones a ese país para facilitar el acceso a los medios internacionales, testimoniar la violación a los derechos humanos y a las libertades públicas y solidarizarse con el movimiento. En estas delegaciones han participado la Central Sindical de las Américas (CSA), la Vía Campesina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la red Enlazando Alternativas, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, ALOP, decenas de organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, y en particular varias delegaciones de sectores democráticos de Estados Unidos, la mayor parte integrantes o aliadas de la Alianza por un Comercio Responsable (ART).

Estas organizaciones han producido informes semanales en los cuales se prueba la represión sobre la población, los asesinatos de varios miembros de la resistencia, la censura de los medios de comunicación, la militarización del país y toda clase de persecuciones y hostigamientos contra la población en resistencia. El seguimiento de las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Honduras y en otros países, ha logrado juntar evidencias de la ignominia, y por eso ahora Micheletti y algunos mandos militares y de la policía han sido denunciados ante la Corte Penal Internacional. **D**

NOTAS

- 1 <http://www.fibre2fashion.com/news/>
- 2 <http://www.laprensahn.com>
- 3 Morazan Pedro y Mario Negre: <http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2009/02/25/Noticias/CAFTA-mejoro-inversion-extranjera-y-exportaciones>
- 4 <http://www.tercerainformacion.es/?Honduras-Intereses-Transnacionales>
- 5 CEPAL: "Estudio económico de América Latina y el Caribe • 2008-2009". Julio de 2009. <http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/4/36464/2009-252-EEE-2009-Honduras-F.pdf>
- 6 "Washington y el golpe de Estado en Honduras." Eva Golinger, Argenpress, 13 de julio de 2009.

Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado en Honduras

Comunicado No. 32

El Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, ante la inminente firma del acuerdo negociado entre la comisión representante del presidente legítimo Manuel Zelaya Rosales y los representantes del régimen de facto, comunica a la población hondureña y la comunidad internacional:

1. Celebramos como una victoria popular sobre los intereses mezquinos de la oligarquía golpista, la próxima restitución del presidente Manuel Zelaya Rosales. Esta victoria se ha obtenido con más de 4 meses de lucha y sacrificio del pueblo, que a pesar de la salvaje represión desatada por los cuerpos represivos del Estado en manos de la clase dominante, ha sabido resistir y crecer en conciencia y organización hasta convertirse en una fuerza social incontenible.

2. La firma por parte de la Dictadura del documento donde se establece “retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio”, representa la aceptación explícita de que en Honduras hubo un golpe de Estado que debe ser desmontado para volver al orden institucional y garantizar un marco democrático en el que el pueblo pueda hacer valer su derecho de transformar la sociedad.

3. Exigimos que a los acuerdos que se firmen en la mesa de negociación se les de trámite expedito en el Congreso Nacional. En ese sentido, alertamos a todos nuestros compañeros y compañeras a nivel nacional para que se sumen a las acciones de presión para que se cumpla inmediatamente lo consignado en el documento final que se elabore en la mesa de negociación.

4. Reiteramos que la Asamblea Nacional Constituyente es una aspiración irrenunciable del pueblo hondureño y un derecho innegociable por el cual seguiremos luchando en las calles, hasta lograr la refundación de la sociedad para convertirla en justa, igualitaria y verdaderamente democrática.

**A 125 DÍAS DE LUCHA,
AQUÍ NADIE SE RINDE**

Tegucigalpa, M.D.C. 30 de octubre de 2009